

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310502020180021501
Proceso:	Ordinario
Demandantes:	Olga Lucía Zapata Figueroa y Martín Darío Toro Ledesma
Demandado:	Colpensiones
M. P.	María Patricia Yepes García SL TSM
Fecha De Fallo:	08/03/2024
Decisión:	Confirma y revoca parcialmente

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 14/03/2024 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Demandante	Olga Lucia Zapata Figueroa y Martín Darío Toro Ledesma
Demandada	Colpensiones
Origen	Juzgado Veinte Laboral Circuito De Medellín
Radicado	05001310502020180021501
Temas	Pensión de Sobrevivientes
Conocimiento	Apelación
Asunto	Sentencia de segunda instancia

La Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

La señora Olga Lucía Zapata Figueroa y el señor Martín Darío Toro Ledesma formularon demanda contra Colpensiones, pretendiendo se declare **i)** les asiste derecho al el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a causa del fallecimiento de su hija Olga Isabel Toro Ledesma, junto con el retroactivo pensional causado y las mesadas adicionales de cada anualidad; así mismo se condene a la demandada al pago **ii)** de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación de las condenas, y **iii)** costas y agencias en derecho.

Fundamentaron sus pretensiones en que el 21 de enero de 2006 falleció su hija Olga Isabel Toro Zapata, quien se encontraba afiliada a Colpensiones con quien cotizó 98.58 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores a su deceso. Señalaron que su hija era soltera, sin unión marital de hecho y no tenía hijos

¹ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 5/7

reconocidos o pendiente por reconocer, ni hijos adoptivos, vivía con sus padres y una hermana menor en el Municipio de Itagüí Antioquia.

Elevaron solicitud de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes ante Colpensiones, la cual fue resuelta desfavorablemente el 31 de marzo de 2011 mediante Resolución N°006888 argumentando que *“el señor Toro Ledesma tiene ingresos superiores a los de su hija y no eran beneficiarios en salud de la misma”*, acto contra el cual se formuló recurso de reposición, el cual se desató mediante la Resolución GNR 219104 del 29 de agosto de 2013 confirmando lo decidido por no haber demostrado la dependencia económica absoluta respecto de su hija.

Afirman que, si bien el señor Toro Ledesma percibía un salario superior al de su hija, era de gran importancia el aporte que percibían ambos de ella, pues como manifestó el señor Toro en la investigación administrativa, sus ingresos eran inferiores a los gastos de su hogar, por ello, era indispensable que la causante ayudara con algunas obligaciones económicas, y debido al fallecimiento de esa hija su situación económica se tornó difícil y disminuyeron las posibilidades de sufragar las necesidades básicas de su hogar.

Oposición a las pretensiones de la demanda:

Colpensiones² se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que los actores no cumplen con los requisitos legales para ser beneficiarios del derecho pensional que deprecian, al no demostrar una situación de dependencia económica directa respecto a la causante, pues durante la investigación administrativa se logró acreditar que los supuestos beneficiarios tienen ingresos propios y no se encontraban afiliados al régimen de salud por parte de la causante, por lo cual deben denegarse las pretensiones en protección de los recursos del Estado que deben utilizarse de forma racional y proporcionada. Excepcionó: Inexistencia del derecho reclamado, buena fe, cobro de lo no debido, prescripción y la que llamó “innominada o genérica”.

Sentencia de primera instancia³

El 24 de julio de 2019, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia condenando a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a los demandantes por el fallecimiento de Olga Isabel Toro Zapata

² 01PrimeraInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 57/64.

³ 01PrimeraInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf pág. 98/99. 07Fallo2020180215.mp3, Min: 8:54 a 55:14

ocurrido el 21 de enero de 2006. Ordenó el pago del retroactivo pensional desde el 13 de abril del 2015 hasta de julio de 2019 en la suma de \$40.670.475, el cual será reconocido en un valor igual para cada uno de ellos en un 50%. Advirtió a Colpensiones que a partir del mes de agosto de 2019 deberá incorporar en nómina de pensionados a los actores e iniciar el pago de mesadas pensionales equivalente a 50% del salario mínimo (\$414.058), en favor de cada uno de ellos y efectuar los reajustes que determine el Gobierno. Absolvió a Colpensiones de los intereses moratorios y en su lugar ordenó actualizar o indexar la condena, la cual liquidó en la suma de \$5.247.115. Autorizó a Colpensiones realizar los descuentos de ley en salud y transferirlos a la EPS donde estén afiliados. Condenó en costas a Colpensiones en favor de los demandantes, cuyas agencias en derecho fijó en valor de \$1'656.232.

Para fundamentar su decisión la A Quo tuvo acreditada con la historia laboral allegada al expediente, que la asegurada dejó la causada la prestación deprecada en razón a que cotizó 98.58 semanas en los 3 últimos años anteriores a su fallecimiento, al igual que la dependencia económica de los demandantes respecto de ella, a través de los testimonios brindados por las señoras Elizabeth Vélez Palacios, Luz Elena Posada Velásquez y Cruz Alba Echavarría, quienes dieron cuenta que aquella realizaba aportes económicos al hogar de forma constante y periódica para el pago de mercado y servicios públicos; que su hermana menor Manuela aún estaba estudiando y su padre debía asumir dicho pago, y que ante su fallecimiento, el señor Martin pese a tener su pensión de vejez, tuvo que recurrir a una actividad laboral adicional para solventar las necesidades de su familia, puesto que sus ingresos no eran suficientes, punto en el que resaltó por cuanto la norma no exigía una dependencia absoluta, sino suficiente o complementaria, como lo fue en este caso.

Declaró próspera parcialmente la prescripción, toda vez que los actores presentaron reclamación administrativa desde el 2006, luego en el 2010 reiteró su petición, que finalizó con la resolución del 29 de agosto de 2017, dejando transcurrir los 3 años a que refieren los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST, por lo que tuvo como interrumpido nuevamente dicho fenómeno a partir del 13 de abril de 2018 con la radicación de la demanda, declarando prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 13 de abril del 2015. Finalmente, negó los intereses moratorios porque al no presentarse reclamación administrativa sobre este concepto, el Despacho carece de competencia para pronunciarse sobre éstos, y además porque sólo hasta ese momento Colpensiones tuvo conocimiento sobre el pago de la mesada pensional, ordenando en su lugar indexación de las condenas la cual liquidó a la fecha de la sentencia.

Recurso de apelación

i) **Demandante**⁴: inconforme parcialmente con la sentencia, la activa la recurre únicamente respecto a la absolución de intereses moratorios, esgrimiendo que las razones expuestas por la A Quo para negar dicha pretensión, no exoneran a Colpensiones de la obligación del pago de la mesada pensional, citando la sentencia emanada por la CSJ con Rad. 42783 de 2012, ha reiterado que la imposición de los intereses no resulta de una buena o de mala fe de la entidad al momento de efectuar el pago, sino que derivan solo de la mora en su pago, de ahí que, si Colpensiones hubiera realizado una investigación idónea, recaudando testimonios, como se realizó en el presente trámite judicial, la conclusión hubiese sido la misma que se obtuvo de la sentencia, es decir, que los demandantes son beneficiarios de la prestación. Respecto a la falta de competencia aducida por la A Quo para la absolución de este concepto, señaló que la pretensión que exige el agotamiento de la reclamación administrativa es la principal, sobre la cual se fijó el litigio y giró el debate probatorio, en consecuencia, sí tenía competencia para decidir sobre ellos al ser una pretensión consecuencial, por ello, pide ordenar su reconocimiento desde la fecha en que fue interrumpida la prescripción, esto es 13 de abril de 2015. Subsidiariamente, en caso de confirmar la absolución, solicitó se modifique la indexación ordenada, para en su lugar disponer su actualización por parte de Colpensiones al momento efectivo del pago.

Colpensiones se abstuvo de interponer recurso de alzada.

Alegatos en segunda instancia

Concedido el término para alegar de conclusión en esta sede, solo Colpensiones lo recorrió oportunamente mientras que la activa se abstuvo de pronunciarse. La **demandada**⁵ reiteró los argumentos expuestos al oponerse a las pretensiones de la demanda en torno a que los demandantes no acreditan la dependencia económica, por lo que deben negarse las pretensiones.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del mismo código, es decir, por los puntos que fueron objeto de apelación. Igualmente se surte el grado

⁴ 01PrimeraInstancia 07Fallo2020180215.mpe3 Minutos 56:50 a 1:01:37

⁵ 02SegundaInstancia; 09AlegatosColpensiones2020180215.pdf

jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, entiende la Sala, que el problema jurídico a resolver se restringe a determinar: **a)** la procedencia o no del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de los demandantes, y en caso afirmativo, se analizará **b)** la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o si en subsidio hay lugar a modificar la indexación ordenada en el sentido de disponer que la misma se cuantifique al momento del pago de la obligación.

No se discute que la afiliada haya dejado causado el derecho a la prestación en favor de sobrevivientes, por cuanto, Colpensiones al negar su reconocimiento y pago, arguye que lo hace porque los padres no demostraron la dependencia económica respecto a la causante para la fecha del fallecimiento, y reconoce expresamente que ésta cotizó 94 semanas dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento⁶.

Hechos relevantes probados documentalmente:

- Olga Lucía Zapata Figueroa nació el 3 de febrero de 1952 y Martín Darío Toro Ledesma nació el 17 de noviembre de 1956⁷.

- Olga Isabel Toro Zapata⁸ nació el 13 de junio de 1984⁹. Fue hija de Olga Lucía Zapata Figueroa y Martín Darío Toro Ledesma, y falleció el 21 de enero de 2006¹⁰.

- Según historia laboral expedida por Colpensiones y actualizada al 5 de abril de 2017¹¹, la causante se afilió a dicha AFP el 24 de febrero de 2004 y cotizó un total de 98.58 semanas en toda su vida, desde el 1° de febrero de 2004, hasta el 1° de enero de 2006.

⁶ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 15/17

⁷ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 30/31. No se aportó copia del Registro Civil de nacimiento de los demandantes, pero sí copia de la cédula de ciudadanía de ambos, que indican tales fechas las cuales no fueron discutidas por la pasiva.

⁸ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 27

⁹ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, págs.16/17

¹⁰ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 25

¹¹ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 35

- El 12 de noviembre de 2010 los demandantes radicaron ante el extinto ISS solicitud de reconocimiento de pensión¹², la cual fue resuelta desfavorablemente mediante Resolución N°006888 del 31 de marzo de 2011¹³, argumentando que los accionantes no dependían económicamente de la causante al momento de su fallecimiento, *“ya que el señor TORO LEDESMA tiene ingresos propios superiores a los de su hija y no eran beneficiarios en salud de la misma”*, decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición, la cual fue confirmada por Colpensiones mediante Resolución GNR 219104 del 29 de agosto de 2013¹⁴, por no contar con pruebas contundentes y conducentes con las que los peticionarios demuestren que dependían económicamente de su hija para su sustento y necesidades básicas, no existiendo por tanto, certeza sobre la acreditación de tal requisito.
- Mediante certificado expedido el 29 de octubre de 2010¹⁵ la EPS Comfenalco indicó que el señor Martín Darío Toro se encontraba afiliado a dicha EPS como aportante, y tenía como beneficiarias a su cónyuge Olga Lucía Zapata Figueroa y Manuela Toro Zapata como hija.
- Se allegaron las declaraciones juramentadas recibidas a ambos demandantes en el marco de la investigación administrativa realizada por el entonces ISS¹⁶.

Declaraciones extra juicio

Martín Darío Toro Ledesma y Olga Lucía Zapata Figueroa¹⁷, se presentaron el 4 de noviembre de 2010 ante la Notaría Dieciséis de Medellín, donde manifestaron bajo gravedad de juramento, que Martín ganaba \$1'600.000 en el año 2006, no percibía renta alguna y eran sus únicos ingresos, su hija Olga Isabel Toro Zapata falleció el 21 de enero de 2006 y se ganaba \$426.240, ingresos del cual dependía la familia proveyendo ambos el sustento del hogar, puesto que lo obtenido por el señor Martín era inferior a los gastos del hogar, como servicios públicos, cuota de la casa, mercado, medicinas, recreación, transporte y la enfermedad de Olga Isabel, por lo que la ayuda de su hija era indispensable para tener una vida digna en familia; a su vez se indicó que la señora Olga Lucía nunca laboró, no recibe rentas y siempre ha sido ama de casa.

¹² 01PrimerInstancia; 03ExpedienteAdministrativo; archivos denominados “43186582000101A.TIF” y “431865820000101B.TIF”

¹³ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 15/17

¹⁴ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 20/24

¹⁵ 01PrimerInstancia; 03ExpedienteAdministrativo; archivo denominado “43186582001801A.TIF” y “431865820000101B.TIF”

¹⁶ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 38/40 y 41/44

¹⁷ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 37

a) Los demandantes como beneficiarios de la prestación.

La calidad de beneficiarios invocada por los demandantes está regulada en el artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, modificadora de los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993¹⁸, la cual exige la dependencia económica de los padres respecto del causante, para el momento del deceso.

En criterio de la H. Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la prestación de sobrevivientes constituye *“una garantía frente al estado de desprotección económica de un grupo de personas que no pueden subsistir con recursos propios y cuyas condiciones de existencia se encuentran ligadas a lo que proveía su descendiente fallecido”*¹⁹

Esa Corporación y la Corte Constitucional, han definido el alcance de la dependencia económica como el estado de necesidad que se predica de quien depende económicamente, frente a la persona que asume la obligación de su sustento, precisando que tal situación **no tiene que ser total y absoluta**²⁰, porque en el contexto de un Estado Social de Derecho **no puede exigirse la configuración de estados de indigencia**, pero, sí debe existir una relación de necesidad entre el aporte y la vida digna del beneficiario, de modo que en el contexto jurisdiccional, el análisis debe enfocarse en que sin la ayuda del benefactor, la persona frente a quien se predica la dependencia económica entraría en un estado de afectación considerable de sus derechos fundamentales, por consiguiente, al faltar la ayuda del afiliado, la economía del peticionario se vería menoscabada.

Según lo anterior, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial, precisó las siguientes sub reglas aplicables, en el estudio de estos asuntos²¹:

- La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada.
- Para concluir la dependencia, **es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al**

¹⁸ D) A falta de cónyuge, *compañero o compañera permanente* e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este;

¹⁹ SI4599 de 2019

²⁰ En Sentencia C-111 de 2006, decidió “Declarar **EXEQUIBLES** los literales d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, salvo la siguientes expresión: *“de forma total y absoluta”*, que se declara **INEXEQUIBLE**

²¹ La línea jurisprudencial se abandera por la sentencia hito, radicación N° 35.156 del 9 de junio de 2010 de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ratificada en las sentencias radicación N° 35.991 de 2011; N° 37.595 de 2011; N° 42.792 de 2011; SL 9640 de 2014; SL 8928 de 2014; SL 8406 de 2015 radicación N° 47.693 del 1 de julio de 2015, entre otras.

causante para el momento del fallecimiento, de modo que, al faltar el ingreso, se afecte el mínimo sostenimiento de la familia.

Ha expresado esa Alta Corporación que debe entenderse por dependencia económica “*«la subordinación de una persona respecto de otra, por necesitar de su ayuda o auxilio para llevar una vida digna»*, puntualizando que dicha condición desaparece *«cuando la persona es autosuficiente, por estar en capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos indispensables para su subsistencia en condiciones de dignidad»*”²².

El concepto atiende a “**i)** *una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii)* y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo”²³. “la dependencia de los padres respecto de sus hijos no debe ser absoluta, pero en todo caso la relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida debe ser de tal proporción que les impida valerse por sí mismos, aun cuando cuenten con recursos propios o provenientes de terceros”²⁴.

Dicha postura, reiterada en sentencias como las SL 1016 de 2020, SL 10759 de 2020 y SL 2375 de 2020, entre otras, también enfatiza en que la dependencia económica no se desvirtúa porque los reclamantes tengan ingresos provenientes de terceros ajenos al causante del que se predica la dependencia o tengan vivienda propia. Recientemente, en **sentencia SL 386 de 2023**, la Alta Corporación reiteró que “*Ante la circunstancia de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido no excluye su derecho a obtener la prestación. La única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas*”

Al tenor del artículo 167 del CGP, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen; en el caso, compete a los demandantes demostrar que dependía económicamente de su hija para el 21 de enero de 2006²⁵, fecha de su fallecimiento.

Con la intención de formar el convencimiento judicial en este sentido, los demandantes solicitaron que se recibieran los testimonios de Cruz Alba Echavarría

²² Sentencia SL1219 de 2019, citando la 44601 de 2011

²³ SL 848 de 2019, citando la SL 14923 de 2014

²⁴ SL 4599 de 2019

²⁵ 01PrimeralInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 25

Piedrahita, Olga Margarita Jaramillo Castañeda, Luz Elena Posada Velásquez y Elizabeth Vélez Palacio²⁶. De ellos comparecieron Elizabeth Vélez Palacio, Luz Elena Posada Velásquez y Cruz Alba Echavarría. Por su parte, Colpensiones solicitó el interrogatorio de los demandantes²⁷.

De las declaraciones se extrae la siguiente información relevante:

Martín Darío Toro Ledesma²⁸ -Demandante-	<p>Señaló que es casado con la señora Olga Lucia Zapata Figueroa desde hace 25 años, con quien procreó a su hija Olga Isabel y Manuela Toro. Es tecnólogo en administración y finanzas, trabaja como administrador de una cooperativa ubicada en la Central Mayorista con contrato a prestación de servicios y es pensionado por Colpensiones hace un año.</p> <p>Contó que su hija Olga Isabel murió el 21 de enero de 2006 cuando tenía 20 años de edad a causa de un cáncer llamado Sarcoma de Ewing, enfermedad catastrófica, estaba soltera, no tenía hijos y vivía con ambos padres. Afirmó que los gastos del hogar los cubrían entre él y su hija, pues el salario que devengaba él era insuficiente para subsistir. Cuando falleció su hija estaba laborando y las prestaciones sociales las reclamaron él y su esposa.</p>
Olga Lucia Zapata Figueroa²⁹ -Demandante-	<p>Estudio hasta bachillerato, es ama de casa y está casada con Martín Darío Toro, con quien tuvo dos hijas, Olga Isabel y Manuela Toro. Contó que su hija Olga Isabel falleció el 21 de enero de 2006, era soltera y no dejó hijos, trabajaba en una ladrillera. Indicó que no tiene fuente de ingresos, ni bienes a su nombre ni es pensionada, y sus gastos actuales los cubre su esposo Martín Darío, pero en vida de su hija los gastos básicos y necesidades del hogar la asumían entre su esposo y su hija Olga Isabel. Afirmó que su esposo actualmente labora en una cooperativa y es pensionado, y explica volvió a trabajar porque se le presentó la oportunidad y lo necesitaba.</p>
Elizabeth Vélez Palacio³⁰ -Testigo demandante-	<p>Conoce a los demandantes desde hace 25 años porque fueron vecinos de toda la vida, conoció a sus dos hijas Olga Isabel y Manuela por haber estudiado juntas desde los 4 años en el jardín y luego en el Colegio la Inmaculada desde kínder hasta Once, y afirmó que eran casi “como hermanitas” por ser muy cercanas.</p> <p>Narró Olga Isabel falleció un 21 de enero del 2006, a causa de un</p>

²⁶ 01PrimeralInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 7

²⁷ 01PrimeralInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 64

²⁸ 01PrimeralInstancia; 06AudienciaTramite2020180215.pdf minutos 7:15 a 15:03

²⁹ 01PrimeralInstancai; 06AudienciaTramite2020180215.pdf minutos 16:09 a 24:12

³⁰ 01PrimeralInstancai; 06AudienciaTramite2020180215.pdf minutos 24:50 a 48:47

	<p>cáncer que le surgió cuando estaban en el grado octavo, le empezó por la pierna y tuvieron que amputársela y le pusieron prótesis; afirma que vivió todo el proceso de su enfermedad. Contó que Olga Isabel laboró en la Ladrillera llamada Alcarraza donde tenía un cargo administrativo, donde devengaba un salario mínimo, en esa época estaba en \$408.000, donde inicialmente hizo prácticas, -las cuales consiguió porque la mamá de la testigo era la encargada de contabilidad en dicha empresa-, y cuando terminó la vincularon; explicó que la causante con su salario mercaba y pagaba los servicios, lo que le consta porque ambas se mantenían juntas, la acompañaba a mercar cerca a la casa, y ella iba con sus muletas entonces la testigo le ayudaba a cargar los paquetes, y como también estaba laborando pues cuando Olga mercaba ella también llevaba algunas cosas para su casa, ayuda que asevera nunca dejó de dar, porque incluso su mamá le pedía ayuda a Olga con la contabilidad y ella le ayudaba económicamente, lo cual siempre era para su casa. Sabe que Olga Lucía, la madre de la causante siempre ha sido ama de casa y no recibía ingresos, lo que sabe porque su mamá la dejaba con ella para que la cuidara, más no le daba una retribución económica por esto, ya que su mamá era madre cabeza de familia y estaba “muy apretada”; Martín, padre de Olga, trabajaba en una empresa que se llama Los Restrepos. Recuerda que la casa de los demandantes, la de su propia madre y otra amiga tenía crédito hipotecario, y muchas veces las familias se veían en dificultades para pagarlo. Martín se encargaba del crédito hipotecario de la vivienda, el colegio y transporte de Manuela Toro, sabe que el colegio valía alrededor de \$250.000 porque ella fue al mismo, el transporte \$200.000 porque las transportaba la misma señora; el impuesto predial a casi \$120.000 o \$150.000 porque tenían un apartamento similar</p> <p>Afirmó que Olga Isabel, en varias oportunidades manifestó su angustia por la condición económica de su hogar, que decía <i>“no me va alcanzar para ayudar a mis papas, yo alcanzo solamente a mercar, a pagar los servicios y yo sé que mi papá en este momento está súper apretado para pagar el crédito hipotecario, el colegio de Manuela, yo quisiera darles más, pero yo creo que más adelante cuando consiga otro trabajo que yo devengue más porque ahora no puedo en estos momentos”</i>. Y señaló que después del fallecimiento de Isabel la situación de ese hogar se tornó difícil, porque el salario del señor Martín no era suficiente para cubrir con lo que ayudaba Olga Isabel, y para ese momento Manuela todavía estaba en el colegio.</p> <p>Manifestó que cuando falleció Olga Isabel era soltera y no tenía hijos, su familia no tenían otro bien inmueble; que el señor Martín actualmente</p>
--	--

	<p>está laborando medio tiempo como administrador en la Central Mayoritaria, es pensionado y a su criterio los padres de la causante si dependían económicamente de ella.</p>
<p>Luz Elena Posada Velásquez³¹</p> <p>-Testigo-</p>	<p>Conoce a los demandantes desde hace 30 años en razón a que han sido vecinos, y también conoció a sus hijas Olga Isabel y Manuela.</p> <p>Contó que Olga Isabel falleció en el año 2006 a causa de un cáncer, lo que conoce porque fue secretaria en la Ladrillera Alcarraza y acompañó mucho a la familia en ese proceso, en su hospitalización y los visitaba mucho en la casa, pues Olga Isabel trabajó en la ladrillera, inicialmente comenzó con prácticas y posteriormente fue vinculada como auxiliar del puesto de secretaria y laboró hasta su fallecimiento, devengando un salario de \$408.000, dinero que afirma, destinaba a ayudarles a los papás con alimentación, transporte, lo que sabe porque la causante le ayudaba en su puesto de trabajo, y ella le manifestaba mucha inquietud por su situación de salud y la económica de sus padres.</p> <p>Sostuvo que la causante era soltera y no tuvo hijos, hasta su fallecimiento vivió con sus padres y su hermana. Afirmó que la señora Olga Lucia era ama de casa, y desconoce si tenía otra fuente de ingresos, respecto del señor Martín dijo que en el 2006 trabajaba para la empresa “Los Restrepo” y lo que ganaba lo destinaba a los gastos de su hogar, junto con lo que aportaba Olga Isabel, afirmó que, con la muerte de la causante, la situación económica de la familia se tornó supremamente complicada, tanto que de la Ladrillera se les daba eventualmente una ayuda económica para que se solventaran.</p> <p>Sabe que el señor Martín actualmente esta laborando en la Mayorista haciendo revisoría fiscal, pero desconoce si tiene algún ingreso adicional, y que la señora Olga Lucía no tiene ingresos ni empleo.</p>
<p>Cruz Alba Echavarría Piedrahita³²</p> <p>-Testigo</p>	<p>Conoce a los demandantes hace 33 años en razón de vecindad; sabe que tuvieron 2 hijas Olga y Manuela. Fue fundadora, junto con los demandantes de la urbanización donde viven en el barrio Calatrava, que fue una urbanización de Conavi, que iban las empresas y ofertaban las casas, las cuales se adquirieron con UPAC.</p> <p>Sabe que Olga Isabel falleció hace 13 años aproximadamente, ella estudiaba y luego comenzó a laborar en una Ladrillera, pero no recuerda el nombre, donde trabajó alrededor de 2 años, sabe que devengaba</p>

³¹ 01PrimeraInstancai; 06AudienciaTramite2020180215.pdf minutos 49:25 a 1:02:38

³² 01PrimeraInstancai; 06AudienciaTramite2020180215.pdf minutos 1:03:20 a 1:16:50

	<p>como “400 y piquito” porque una vez lo comentaron en una visita que se hizo en la casa de ellos. Señaló que su salario lo destinaba para ayudar a la familia, pues se encargaba de pagar los servicios y el mercado, lo cual fue de manera constante, y los demás gastos los asumía el señor Martín, como el crédito hipotecario, el colegio de Manuela, el transporte de Olga porque ella no se podía transportar en bus.</p> <p>Señaló que la señora Olga Lucía era ama de casa y no percibía ingreso alguno, y Manuela era estudiante cuando su hermana falleció, por lo que a raíz de este suceso sus condiciones económicas desmejoraron porque ya le tocó asumir todo solo a Martín, quien ahora está pensionado y tiene un contrato de prestación de servicios.</p>
--	---

Valorado el haz probatorio relacionado, contentivo de los interrogatorios absueltos por ambos demandantes, cotejados con la prueba documental glosada al expediente, las declaraciones recibidas en primera instancia por las testigos, quienes fueron espontáneas, responsivas, coincidentes y guardan plena coherencia en sus dichos, permiten a la Sala formar el convencimiento judicial en torno a la verdadera dependencia económica de los padres respecto de su hija fallecida, pues se extrae con certeza que desde el momento en que Olga Isabel inició su vida laboral, sus padres recibieron su ayuda, asumiendo los gastos del mercado y servicios públicos, la cual fue relevante para su sustento; contribuyó de forma relevante y determinante para la subsistencia de sus progenitores, siendo su madre una ama de casa sin ingresos o renta de alguna clase, y su padre, aunque en su momento activo laboralmente, no contaba con ingresos suficientes para sufragar todos los gastos del hogar, pues éste asumía el crédito hipotecario de la vivienda, el colegio de su hija Manuela y su transporte, debiendo dividir las responsabilidades con su hija, quien además padecía de una enfermedad catastrófica.

Lo anterior, guarda coherencia con las declaraciones juramentadas rendidas por ambos demandantes en el marco de la investigación administrativa realizada por el entonces ISS³³, diligencia donde la señora Olga Lucía referenció que es ama de casa, que vive con su esposo Martín y su hija Manuela, que no tienen actividades que le generen ingresos adicionales o rentas, que su hija Olga Isabel laboraba en la Ladrillera Alcarraza donde devengaba el salario mínimo, que sus gastos mensuales ascienden a \$700.000 aproximadamente, los cuales cubre su esposo, y antes del fallecimiento de Olga Isabel, ella también contribuía con los gastos, ella aportaba el mercado, la salud, las medicinas y tratamientos médicos, y lo de recreación cuando

³³ 01PrimeraInstancia; 02ExpedienteDigitalizado2020180215.Pdf, págs. 38/40 y 41/44

recibía una prima, su esposo cubría los servicios que eran \$170.000 y \$500.000 para la cuota de la casa. Su hija Manuela se encuentra cursando estudios universitarios, aún vive con ellos, y no hacía o hace aportes económicos. Señaló que el aporte de su hija Olga Isabel era necesario porque su esposo “para ese entonces no ganaba un sueldo que nos pudiera sostener a todas para tener una vida digna”, explicó que su vida antes de que ella comenzara a laborar era muy difícil porque tenían que abstenerse de muchas cosas, la alimentación y vestuario era limitado, no había recreación. Por su parte el señor Martin Darío afirmó que su hija no dejó hijos, no tenía vínculo matrimonial ni unión libre. Vive junto su esposa y su hija Manuela, en casa propia que están terminando de pagar a la entidad financiera, su hija Olga Isabel cuando falleció también vivía con ellos. Sus ingresos los obtiene de su salario que ascienden a \$2'200.000 mensuales, pero su esposa Olga Lucía no tiene ingresos, siempre ha sido ama de casa y depende económicamente de él, no tiene bienes ni rentas; señaló que la causante laboraba como auxiliar administrativa, recibía un salario de \$426.000 para el año 2006, y él recibía \$1'600.000; ella comenzó a trabajar desde los 18 años de edad hasta que falleció a los 21 años, afirmó que entre su hija y él sostenían el hogar, ella aportaba un 50%, que se reflejaban en la alimentación, medicinas, recreación, pensión del estudio de la hermana, alrededor de unos \$350.000 que aportaba, negó que su otra hija ayude económicamente por ser estudiante universitaria, es soltera y vive con ellos. Indicó que fue él quien se encargó de los gastos funerarios, los cuales fueron reintegrados por el Seguro Social, afirmó que, era necesario e indispensable el aporte de su hija “porque solo no era posible pagar casa, estudio, medicina, vestuario y recreación”, y antes de que ella pudiera aportar, su situación era muy complicada porque no les alcanzaba para todo debiendo limitarse en muchas cosas.

Visto lo anterior, puede concluirse que así el aporte de la afiliada no fuera superior al de su padre, es evidente que repercutía directamente en las condiciones de vida digna de los demandantes, quienes tras el fallecimiento de su hija se vieron en dificultades económicas, recibiendo ayudas eventuales de terceros, e incluso pese a que el señor Martín se encuentra actualmente pensionado como lo informó, se ha visto precisado a continuar laborando, lo que da cuenta de la necesidad de procurarse recursos adicionales para el sostenimiento del hogar, pues las testigos fueron coincidentes con los dichos del actor, en torno a la insuficiencia de los recursos propios para solventar el hogar, lo que evidencia que la ayuda proporcionada por su hija Olga Isabel era fundamental y determinante para garantizar las condiciones de vida digna de sus padres.

La dependencia económica no significa la carencia absoluta y total de ingresos o recursos por parte de quien solicita la sustitución pensional, hasta tener que probar

la desprotección o abandono total, a raíz de la muerte del causante. Basta con demostrar una afectación sustancial a las condiciones materiales de vida o la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que permita a los beneficiarios obtener unos ingresos para vivir de manera digna, sin que ello se desvirtúe porque el actor estuviera activo laboralmente cuando falleció su hija, o que tuviera ingresos superiores a lo que aportaba esta, ni mucho menos porque esta no los tuviera afiliados como beneficiarios al sistema de salud.

En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión **confirmará** la decisión proferida por la Juez de primera instancia, pues se acreditaron en suficiencia los presupuestos normativos para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de los demandantes, la cual se causó a partir del fallecimiento de Olga Isabel Toro Zapata, el 21 de enero de 2006.

b) Actualización de la condena en concreto

No siendo motivo de objeción la prescripción parcial declarada por la A-quo, se dispone la **actualización** de la condena por concepto de mesadas pensionales causadas entre el 13 de abril de 2015 al 29 de febrero de 2024, a razón de 13 mesadas anuales y con base en un SMLMV, la suma de \$99.562.914, detallados como se indica a continuación:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	6,77%	9 y 18 días	\$ 644.350	\$ 6.185.760
2016	5,75%	13	\$ 689.454	\$ 8.962.902
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13,12%	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023	9,28%	13	\$ 1.160.000	\$ 15.080.000
2024		2	\$ 1.300.000	\$ 2.600.000
			TOTAL	\$ 99.562.914
			Total 50%	\$49.781.457

El referido retroactivo pensional será dividido en un 50% en favor de cada uno de los padres en la suma de \$49’781.457.

A partir del 1° de marzo de 2024, Colpensiones continuará pagando en favor de ambos demandantes una mesada pensional de \$1’300.000 equivalente al SMLMV, que debe distribuirse en proporción del 50% en favor de cada uno, sin perjuicio de los aumentos de ley.

Del retroactivo pensional se autorizará a Colpensiones a descontar las cotizaciones destinadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo decantado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia³⁴, tal y como ordenó la A Quo.

c) Intereses Moratorios

Se encuentra legalmente prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993³⁵ la causación de intereses moratorios en favor de los pensionados, ante la tardanza de la administradora de pensiones, en el pago de las mesadas, dentro de los términos legales, que para la pensión de sobrevivientes es de dos (02) meses contados a partir de la reclamación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 717 de 2001.

En el asunto conocido por la Sala, ha transcurrido mucho más de 2 meses entre el momento en que se reclamó el derecho pensional sin que el mismo se haya materializado. La A-quo absolvió del pago de estos intereses, en atención a que consideró que carecía de competencia para resolver sobre éstos, por no haberse reclamado administrativamente, y porque sólo se declaró el derecho mediante esta sentencia; argumentos que no se consideran suficientes en atención a que i) la reclamación administrativa requiere su agotamiento como requisito previo para acudir a la jurisdicción respecto de la pretensión principal, que en este caso fue la del reconocimiento de su derecho para recibir la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hija afiliada, deviniendo entonces el reconocimiento de los intereses moratorios una pretensión consecuencial de la prosperidad de la principal, no siendo exigible entonces dicha reclamación; y además de ello ii) porque la pensión de sobrevivientes fue negada ante la ausencia de dependencia económica, a pesar de haberse contado con una investigación que daba cuenta de que si bien la misma no era absoluta, mínimamente la hija de los demandantes, quien convivía con ellos, era la encargada de asumir el pago del mercado, medicamentos, tratamientos médicos y de la recreación como se referenció en acápite anterior, y que aunado a que del grupo familiar conformado por 4 personas donde solo el padre y la causante asumían los gastos del hogar, podía desprenderse la relevancia del aporte económico brindado por esta para su subsistencia.

³⁴ En las sentencias de SL 1195 del 29 de enero de 2014, radicación 48.918, SL 9782 del 23 de julio de 2014, radicación 54.583; SL 10143 del 30 de julio de 2014, radicación 45.232; SL 13547 del 1 de octubre de 2014 radicación 47.264, entre otras.

³⁵ El art.141 de la Ley 100 de 1993 dispone que “a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”.

Por lo expuesto, se **revocará** en este aspecto la sentencia de instancia, para en su lugar ordenar el reconocimiento y pago de los intereses moratorios en favor de los demandantes.

En virtud de la prescripción declarada sobre el retroactivo pensional, los intereses moratorios se están causando desde el 1° de mayo de 2015 y hasta el día anterior a aquel en que se efectúe el pago de lo adeudado.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por la pasiva quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

IV. COSTAS

Sin costas en esta sede por haberse conocido en grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, y haber prosperado el recurso de la parte demandante.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero y segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de julio de 2019, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por Olga Lucía Zapata Figueroa y Martín Darío Toro Ledesma contra Colpensiones, por lo ya motivado, y ordenar **actualizar** el valor de la condena por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 13 de abril de 2015 y el 29 de febrero de 2024, a razón de 13 mesadas anuales y con base a 1 SMLMV, en la suma de \$99.562.914, la cual será distribuida en un 50% en favor de cada uno de los demandantes.

Se autoriza a Colpensiones a descontar del retroactivo pensional las cotizaciones destinadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

La mesada pensional se continuará pagando a partir del 01 de marzo de 2024 en el equivalente a \$1.300.000, en proporción del 50% en favor de cada uno, y anualmente se incrementará conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

SEGUNDO: REVOCAR los numerales tercero y cuarto de la referida sentencia para en su lugar condenar a Colpensiones al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por la tardanza en el reconocimiento y pago de retroactivo pensional, el cual se entenderá causado a partir del 1° de mayo de 2015 hasta el día anterior a su pago, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin costas en esta sede.

Notifíquese por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS